

Los gobiernos de coalición y la ratificación del gabinete presidencial

Alberto Escamilla Cadena¹

Introducción:

Como parte de la reforma político electoral procesada en México en el año 2014, un aspecto modificado fue la posibilidad de que el Presidente de la República pueda formalizar un *gobierno de coalición*. Esto implica la introducción de tres nuevos mecanismos en el régimen político: *a)* la construcción de una coalición parlamentaria, *b)* la repartición de carteras de gobierno por parte del Ejecutivo hacia los partidos de oposición y *c)* la aprobación del gabinete por parte del Congreso. Si el próximo mandatario decide utilizar estos mecanismos se podrían modificar algunos procedimientos que se han mantenido inalterados durante décadas en el presidencialismo mexicano, como son sus facultades exclusivas de nombramiento y, también, se podría poner fin al gobierno compuesto por un solo partido. Si el Ejecutivo opta por el *gobierno de coalición* ¿qué cambiaría en el presidencialismo mexicano? Si bien esta reforma no es de carácter estrictamente electoral, sus alcances tienen que ver, en cambio, con el régimen político, pues introduce innovaciones en las modalidades del proceso de gobierno. En la primera parte de este trabajo, se exponen algunos desarrollos teóricos vinculados con el presidencialismo y las coaliciones; en la segunda parte se aborda la reforma político electoral de 2014, centrándose en el *gobierno de coalición*; mientras que el último apartado analiza la apertura en el gabinete y la ratificación de sus titulares.

Presidencialismo y gobiernos de la coalición

El tema del presidencialismo y las coaliciones parlamentarias ha sido ampliamente desarrollado en los últimos años como consecuencia del establecimiento de formatos de

¹ Doctor en Estudios Sociales por la UAM Iztapalapa. Profesor Investigador de la UAM Iztapalapa. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. aescamillac@hotmail.com

gobierno sin mayoría y la ampliación del número de jugadores con capacidad de veto. Si se considera que la gobernabilidad democrática depende, en buena medida, de un acuerdo entre los principales actores políticos, las coaliciones y los pactos que llevan a cabo los partidos y el gobierno son igualmente un objeto de estudio muy relevante.

Por principio, los sistemas presidenciales han sido clasificados de acuerdo a sus diferentes características y sus contextos sociohistóricos. Se han elaborado diferentes tipologías con el objeto de precisar sus diferencias. Dieter Nohlen ha propuesto los siguientes tipos: *a) el hiperpresidencialismo, b) el presidencialismo reforzado, c) el presidencialismo puro (o equilibrado), d) el presidencialismo atenuado y e) el presidencialismo parlamentarizado.* (Nohlen;1998,24). En esta clasificación el aspecto que permite matizar las distintas variantes es el nivel de concentración de poder que hay en el Ejecutivo oscilando de un máximo a un mínimo. En cuanto a la relación entre el presidente y el congreso, también distingue entre mandatarios con facultades constitucionales fuertes, sistemas con facultades equilibradas entre ambos órganos de poder (*checks and balances*) y facultades presidenciales atenuadas. (Nohlen;2012b,227).

En esta misma línea, los modelos de democracia *mayoritaria* y *consensual* propuestos por Arend Lijphart tienen también como uno de sus referentes la relación entre Ejecutivo y Legislativo; en el caso del primer modelo, el presidente está respaldado por una mayoría de su partido en el congreso y puede sacar adelante sus propuestas legislativas; mientras que en el segundo, ambos poderes tienen un mayor grado de independencia, por lo que su relación es mucho más equilibrada (Lijphart;2000,23-47). Jorge Lanzaro ha propuesto las categorías de *presidencialismo de mayoría* y *presidencialismo pluralista*, en donde la principal distinción es que “en los sistemas afincados en la regla de mayoría, el que gana gobierna; mientras que en los sistemas afincados en reglas pluralistas, el que gana comparte su triunfo y está obligado a negociar los productos de gobierno.” (Lanzaro;2001,22). Estas distinciones también tienen como componente central el grado de concentración de poder que puede tener un presidente frente al Poder Legislativo. El siguiente cuadro muestra las características de los diferentes tipos de presidencialismo de acuerdo a Dieter Nohlen.

Cuadro 1

Tipos de presidencialismo

Tipos de presidencialismo	Ejercicio de poder
Hiperpresidencialismo o dominante	<ul style="list-style-type: none"> - Concentración de poder en el Ejecutivo, - Supresión de los controles horizontales. - Ejercicio del poder con altos ingredientes personalistas y plebiscitarios al borde de un sistema constitucional-democrático. - Estilo de decisión jerárquico decisional.
Reforzado o racionalizado	<ul style="list-style-type: none"> - Fuerte Poder Ejecutivo en cuanto a competencias, resultante de reformas constitucionales. - Racionalización del proceso político en función de agilizar políticas de desarrollo. - Estilo de decisión mayoritaria.
Puro o equilibrado	<ul style="list-style-type: none"> - Modelo estadounidense, poderes equilibrados entre Ejecutivo y Legislativo. - Funcionamiento muy dependiente del sistema de partidos. - Estilo de decisión mayoritaria.
Atenuado	<ul style="list-style-type: none"> - Poderes constitucionalmente equilibrados entre Ejecutivo y Legislativo. - El proceso político está determinado por factores como el tipo de sistema de partidos. - Estilo de decisión mayoritaria.
Parlamentarizado	<ul style="list-style-type: none"> - No tanto determinado por elementos constitucionales de origen parlamentarista (por ejemplo figura de un primer ministro, voto de censura, capacidad de disolver el Parlamento), sino por la práctica política (por ejemplo, gobiernos de coalición). - Estilo de decisión negocial y de compromiso.

Fuente: Nohlen, Dieter, (2012a), *¿Cómo estudiar Ciencia Política? Una introducción de trece lecciones*, Marcial Pons, Madrid, p. 144.

Dado que los presidencialismos latinoamericanos han enfrentado una serie de retos y dificultades durante los periodos de consolidación democrática, ha aparecido una corriente de estudios que plantea algunos mecanismos de orden constitucional e institucional para

renovar las funciones y las prerrogativas de los presidentes. Derivado de estas propuestas, diversos autores sugieren conceptos como *adecuación funcional del presidencialismo* (Nohlen), *racionalización del poder presidencial* (Valadés), *parlamentarización del presidencialismo* (Carpizo) o *presidencialismo intermitente* (Sartori).

Diego Valadés apunta que la *racionalización del poder presidencial* implica orientarlo en dirección parlamentaria aunque sin desprenderse de la forma de gobierno original. De acuerdo a este autor, ello “no implica debilitar el poder del ejecutivo sino fortalecerlo en el sentido de que pueda contar con el apoyo del congreso. Significa la incorporación de instituciones de origen parlamentario, adoptando instituciones de este sistema pero preservando la estructura básica del sistema receptor, es decir, subsiste la matriz presidencial, pero se le agregan algunos mecanismos de control político de oriundez parlamentaria.” (Valadés;2007). Las diferentes propuestas de renovación sugieren la necesidad de límites a los poderes constitucionales del Ejecutivo, vigilancia y control hacia sus acciones y desconcentración de facultades hacia otros órganos.

Uno de los aspectos que ha sido ampliamente tratado en el estudio de los sistemas presidencialistas es el fenómeno del gobierno sin mayoría. Para algunos, este formato tendría que evitarse con el fin de disminuir la posibilidad de una parálisis en el proceso legislativo; para otros, permite la emergencia de un contrapeso que resulta necesario hacia las acciones del ejecutivo. Dado que la gobernabilidad exige mayorías calificadas para aprobar reformas, un presidente que no cuenta con este apoyo queda supeditado a la formación de coaliciones parlamentarias para evitar la inacción de gobierno. Sobre este punto cabe distinguir entre una *coalición electoral*, una *coalición parlamentaria* y un *gobierno de coalición*. La primera es una fusión entre dos o más partidos para competir en una elección bajo una candidatura común. La segunda se refiere a las alianzas que llevan a cabo las fracciones parlamentarias en el congreso para alcanzar la mayoría requerida para sancionar leyes. El tercero implica que el titular del Ejecutivo deberá repartir carteras de gobierno a miembros de la oposición, formando un gabinete compuesto por más de un partido. Por lo general, los gabinetes se componen por militantes del partido que ocupa la presidencia; sin embargo, cuando se abren

espacios a otras fuerzas políticas en la burocracia gubernamental se conforman gabinetes bipartidistas o multipartidistas. (Lijphart;2000). Esto implica que las elecciones presidenciales ya no se constituyen necesariamente en un “juego de suma cero” en donde el ganador se lo lleva todo, sino más bien, el que gana comparte su triunfo.

En el caso de la *coalición parlamentaria*, en situaciones de gobierno dividido resulta necesaria la cooperación del Poder Legislativo, sin este apoyo un gobierno podría quedarse en condición de minoría y sin la posibilidad de despejar su agenda. En cambio, cuando estas alianzas se producen al interior del congreso, se pueden distinguir dos tipos de *coalición parlamentaria*. Una, es la *coalición mínima ganadora*, que implica una alianza entre dos partidos con el fin de alcanzar el número necesario de votos requeridos para aprobar leyes y reformas. La segunda es la *coalición sobredimensionada*, conformada por un número de partidos mucho más amplio, en donde la aprobación de una legislación tiene lugar a partir del apoyo de la mayoría de fuerzas políticas. (Rikker;2001,151-169). Los sistemas presidenciales con gobierno dividido y con relaciones de poder equilibradas entre Ejecutivo y Legislativo dependen en buena medida de las *coaliciones parlamentarias* para poder gobernar. En algunos países estas alianzas son excepcionales, no se producen con frecuencia, mientras que en otros, son una práctica común. No obstante, los pactos entre la clase política suelen durar poco, difícilmente se mantienen a lo largo de todo un mandato. Sean o no recurrentes, las coaliciones no suelen perdurar por mucho tiempo.

La reforma política de 2014

México es un caso donde se ha establecido de manera permanente, desde 1997, un gobierno sin mayoría. Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República en 2012 este formato se ha replicado, el presidente Enrique Peña Nieto no cuenta con un congreso controlado por su partido, el Revolucionario Institucional. Ante esta situación, el mandatario formalizó el “Pacto por México”, esto es, una *coalición parlamentaria* (formada por el PRI,

el PAN, el PRD y algunos partidos menores) destinada a negociar una agenda de temas, en donde fueron acordados los contenidos y los tiempos para debatir y aprobar una serie de reformas constitucionales. Durante su primer año de gobierno, se concretaron ocho modificaciones con el apoyo de las dirigencias de los partidos de oposición.

En un inicio, el “Pacto por México” se constituyó en una amplia coalición que incluyó a la mayoría de los partidos políticos, esta fusión produjo la aprobación de reformas en materia de educación, de telecomunicaciones, de transparencia, una financiera y una que regula el endeudamiento de las entidades federativas. Posteriormente, el pacto pasó a ser una *coalición mínima ganadora* con la aprobación de las reformas fiscal (votada a favor únicamente por el PRI y el PRD), la política y la energética (votada a favor únicamente por el PRI y el PAN).

Una consecuencia del “Pacto por México” fue que la oposición partidista logró introducir algunos de sus temas prioritarios en la agenda de gobierno y también pudo modificar varios de los contenidos de las iniciativas que inicialmente había presentado el presidente Enrique Peña Nieto. De igual forma, condicionaron su permanencia en dicho pacto al exigir cambios en áreas en las que el PRI se había negado sistemáticamente a modificar. Desde que se instauró el gobierno dividido en México, la tendencia que se presentaba con frecuencia era que los legisladores que pertenecían a la oposición tenían pocos incentivos para cooperar y apoyar las iniciativas del presidente. Sin embargo, en la primera parte del actual sexenio prevaleció el apoyo entre partidos.

En este contexto, se procesó una reforma político electoral, en donde nuevamente se modificaron aspectos importantes como la aprobación de candidaturas independientes, se equipararon las cuotas de género, se elevó el porcentaje mínimo que deben alcanzar los partidos para mantener su registro, el Instituto Federal Electoral se transformó en Instituto Nacional Electoral con la facultad para atraer elecciones locales, se otorgaron mayores

instrumentos de fiscalización a este órgano y se estableció la posibilidad de formalizar gobiernos de coalición. Estas modificaciones fueron propuestas por las fracciones parlamentarias del PAN y del PRD en el Senado. Al establecerse la posibilidad de que el Ejecutivo pueda formalizar un *gobierno de coalición*, se introdujeron mecanismos constitucionales novedosos en el régimen político mexicano. A continuación se presenta un extracto de la iniciativa de reforma al artículo 89 constitucional.

La experiencia de la pasada elección federal muestra claramente que la democracia mexicana demanda una nueva generación de reformas. Para ello, es urgente redefinir los órganos del Estado y las relaciones de cooperación y control entre ellos, evitando la parálisis legislativa causada por el gobierno dividido. Uno de los argumentos que más se han presentado con los sistemas presidenciales es que un gobierno dividido fomenta el estancamiento y la parálisis en las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo. En México hemos vivido gobiernos divididos desde 1997, por lo que es necesario conformar gobiernos de coalición que permitan lograr acuerdos que aseguren la posibilidad de que se pueda aprobar una agenda legislativa común a varios partidos.

La iniciativa busca transitar hacia un sistema presidencialista renovado que permita la construcción de un sistema estable de alianzas. La cuestión principal a resolver es la integración de una mayoría gobernante que permita tanto al Legislativo como al Ejecutivo cooperar en el ámbito de sus responsabilidades. Existen en diversos sistemas presidenciales elementos parlamentarios que permiten al Ejecutivo fortalecer la creación de consensos, tal es el caso del Jefe de Gabinete en Argentina, la moción de censura en Uruguay o la ratificación del gabinete presidencial en los Estados Unidos de América.

En virtud de lo anterior, se propone facultar al Presidente la República para optar por un gobierno de coalición en caso de no contar con mayoría congresional, por lo que deberá acordar el programa de gobierno y la agenda legislativa con las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Así mismo, someterá a la Cámara de Senadores, para que sea este órgano legislativo, quien por mayoría simple, ratifique a cada uno de los secretarios de despacho, a excepción de Hacienda y Crédito Público, quien será ratificado por la

Cámara de Diputados. Independientemente de que el gobierno opte o no por el modelo de coalición, se propone también que el Senado de la República ratifique el nombramiento del Secretario de Relaciones Exteriores.²

La reforma fue aprobada por el PRI y el PAN, mientras que el voto del PRD estuvo dividido. Esta modificación le confiere al Ejecutivo una nueva prerrogativa, pues podrá hacer uso de un mecanismo hasta ahora inédito como lo es el *gobierno de coalición*, ello con el fin de obtener la cooperación del Poder Legislativo. De igual manera, este cambio podría representar el paso hacia un presidencialismo con matices parlamentarios, una vez que el congreso podrá intervenir en los nombramientos del gabinete. La reforma introduce tres nuevos elementos en el régimen político.

1. Otorga un sustento legal a la formación de coaliciones parlamentarias por parte de los partidos políticos representados en el congreso.
2. El Ejecutivo deberá compartir carteras de gobierno con algunos miembros de la oposición partidista.
3. El Poder Legislativo ratificará a los titulares del gabinete propuestos por el Presidente de la República.

En caso de que el titular del Ejecutivo optara por el *gobierno de coalición*, propiciaría un presidencialismo distinto en México, dado que introduciría componentes parlamentarios hasta ahora inéditos en el régimen político. De acuerdo a lo que desde hace algunos años plantearon autores como Jorge Carpizo, Diego Valadés, María Aparó Casar o Alonso Lujambio, esta sería la orientación que inevitablemente tomaría el presidencialismo mexicano. Una vez que aparecieron los contrapesos a su poder, emergieron nuevos actores

² *Iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LXII Legislatura, Senado de la República, 24 de Septiembre de 2013.*

con capacidad de veto y se restringieron sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, parecía inevitable su parlamentarización.

Coaliciones parlamentarias y ratificación del gabinete

De acuerdo a la reforma política de 2014, para el sexenio 2018-2024 el Presidente de la República tendrá la posibilidad de conformar un *gobierno de coalición*. Esto significa que su partido podrá llevar a cabo una alianza parlamentaria con al menos otro partido de oposición para alcanzar la mayoría requerida y reformar la constitución. Las coaliciones legislativas son una práctica que se ha venido desarrollando en México desde hace más de dos décadas,³ con la reforma de 2014 se ha otorgado un sustento legal a esta práctica. Esta medida busca otorgarle al presidente un instrumento para obtener la cooperación del legislativo a través de alianzas entre partidos políticos con el fin de tener condiciones mínimas para la gobernabilidad democrática. En caso de que el presidente optara por este instrumento, se reforzaría la tendencia hacia el modelo de *presidencialismo pluralista y de coalición* para el caso mexicano, pues la construcción de una mayoría congresional tendría lugar a partir de alianzas partidistas.

Si bien esta reforma le otorga un instrumento al Ejecutivo para formar mayorías congresionales entre varios partidos políticos para garantizar el desahogo del proceso legislativo y poder despejar la agenda de gobierno, existe también el riesgo de que el partido que ocupe la presidencia se coaligue con un partido menor y entre ambos alcancen la mayoría requerida (por ejemplo PRI y PVEM), lo que dejaría fuera del acuerdo a otras fuerzas políticas. Con ello, el presidente podría requerir del apoyo de un solo partido formando una *coalición mínima ganadora*, lo que terminaría por excluir al resto de fuerzas políticas representadas en el congreso. Esto podría tergiversar la intención original de la reforma, es

³ Desde que el PRI perdió la mayoría calificada en la Cámara de Diputados en 1988, las coaliciones parlamentarias han sido necesarias, no solo para sancionar leyes y reformas, sino también para aprobar el presupuesto.

uno de los posibles escenarios que podría presentarse, lo que desvirtuaría el espíritu que motivó la *coalición de gobierno*, esto es, compartir los espacios de poder con la mayoría de los partidos políticos. El tamaño de la coalición estará en función del número de partidos que la integren.

Otra de las implicaciones que tiene *el gobierno de coalición*, es que el Presidente de la República deberá repartir carteras de gobierno con algunos miembros de los partidos de oposición formando así un gabinete bipartidista o multipartidista. De esta manera, el Ejecutivo junto con su partido y, al menos otra fuerza política, tendrán que definir, de manera conjunta, un programa de gobierno y una agenda legislativa común. Por lo general, el presidente suele designar Secretarios de Estado y funcionarios de la administración pública federal que pertenecen a su partido político, aunque en los mandatos más recientes, se ha incluido a algún miembro de la oposición en carteras como la Procuraduría General de la República o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En México no es común que el gabinete se abra a más de dos partidos; sin embargo, la reforma al artículo 89 sustenta esta posibilidad. Si este nuevo mecanismo entra en vigor, se pondría fin al gobierno encabezado por un sólo partido, esto es, el gabinete presidencial dejaría de estar compuesto exclusivamente por militantes del partido del presidente. Esto obliga a que el partido político que gane la presidencia comparta su triunfo, pues abre espacios de gobierno a la oposición. Con ello, el presidencialismo mexicano podría dejar de constituirse en juego de suma cero en donde “el ganador se lo lleva todo” y la oposición partidista queda excluida, con este nuevo mecanismo el gobierno tendría un carácter más incluyente.

Un cambio igualmente relevante es que si el próximo Presidente de la República opta por el *gobierno de coalición*, los titulares del gabinete deberán ser ratificados por el congreso, esto significa que el Ejecutivo perdería la facultad exclusiva en estos nombramientos, situación que sería inédita para el presidencialismo mexicano. Por principio, se estableció la facultad que tendrá el Senado para ratificar al Secretario de Relaciones Exteriores y al Fiscal General de la República (quien sustituirá al Procurador General de la República); mientras

que la Cámara de Diputados lo hará con el Secretario de Hacienda. No obstante, en caso que el presidente optara por un *gobierno de coalición*, el conjunto de los nombramientos de los Secretarios de Estado deberán ser ratificados por la cámara baja, con excepción de los titulares de las Secretarías de Defensa y de Marina, quienes serán nombrados de manera exclusiva por el Presidente de la República. La intervención que podrían tener ambas cámaras en los nombramientos del gabinete introduciría en el presidencialismo mexicano matices parlamentarios hasta ahora inéditos.

El siguiente cuadro muestra la forma en que se designan a los titulares del gabinete en los países latinoamericanos, como puede verse, el caso mexicano sería el primero en introducir la ratificación del Poder Legislativo para los nombramientos de los Secretarios de Estado. En la mayoría de los casos, esta facultad - casi exclusiva del Poder Ejecutivo - se ha mantenido casi inalterada.

Cuadro 2
Gabinete presidencial. Designación en América Latina.

País	Designación
Argentina	Designación y remoción libres por el presidente.
Bolivia	Designación y remoción libres por el presidente.
Brasil	Designación y remoción libres por el presidente
Chile	Designación y remoción libres por el presidente.
Colombia	Designación y remoción libres por el presidente.
Costa Rica	Designación y remoción libres por el presidente.
Ecuador	Designación y remoción libres por el presidente.
El Salvador	Designación y remoción libres por el presidente.
Guatemala	Designación y remoción libres por el presidente.
Honduras	Designación y remoción libres por el presidente.
México	Designación y remoción libres por el presidente.

Nicaragua	Designación y remoción libres por el presidente.
Panamá	Designación y remoción libres por el presidente.
Paraguay	Designación y remoción libres por el presidente.
Perú	Designación y remoción libres por el presidente del Consejo de Ministros, por el Presidente de la República; los demás ministros son nombrados y removidos a propuesta del Presidente del Consejo.
República Dominicana	Designación y remoción libres por el presidente.
Uruguay	Designación del presidente, con apoyo parlamentario; remoción libre por parte del presidente.
Venezuela	Designación y remoción libres por el presidente.

Fuente: Valadés, Diego, (2005), *El Gobierno de gabinete*, UNAM/IIJ, México, p. 141-142.

De esta forma, el *gobierno de coalición* no se limitaría únicamente a formalizar acuerdos entre el presidente y algunos partidos políticos para formar mayorías y promulgar leyes; incluye también la posibilidad de repartir carteras de gobierno con la oposición y la ratificación de la mayoría de los Secretarios de Estado. Esto significa que el próximo Presidente de la República podría compartir espacios de poder y productos de gobierno y delimitaría una agenda de gobierno con los partidos de oposición.

El dictamen final del artículo 89 aprobado por el Senado quedó de la siguiente forma. En la fracción XVII se establece que el Presidente de la República “En cualquier momento podrá optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulara por el convenio y programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.” A su vez, la fracción IX faculta a la Cámara de Senadores para “Intervenir en la designación del Fiscal General de la República y removerlo en términos de lo dispuesto en el artículo 102 Apartado A de esta Constitución.” Mientras que la fracción II asienta que “En los supuestos de la ratificación de los Secretarios de Relaciones y Hacienda, cuando no se opte por un gobierno de coalición, si la cámara respectiva no ratificare en dos ocasiones el nombramiento del mismo Secretario de Estado,

ocupará el cargo la persona que designe el Presidente de la República.”¹¹ Este nuevo marco normativo es el que entraría en vigor en caso de que se formalizara un *gobierno de coalición*.

Conclusiones

La reforma al artículo 89 aprobada en 2014 abre tres posibilidades para el Presidente de la República: una, es que podrá encabezar un gobierno con mayoría absoluta si su partido obtiene los escaños necesarios en el congreso; la segunda posibilidad es que encabece un gobierno en condición de minoría; mientras que la tercera es formar un *gobierno de coalición* a partir de una mayoría construida por dos o más partidos. Si opta por la última, no sólo contaría con el apoyo del congreso para aprobar leyes o modificar la constitución, sino que además deberá compartir los productos de gobierno con otros partidos. En cuanto a la ratificación del gabinete por parte del Poder Legislativo, se faculta a este órgano para intervenir en nombramientos de los Secretarios de Estado. La reforma introduce flexibilidad al proceso de gobierno una vez que el Ejecutivo puede optar por el instrumento de la coalición para obtener la cooperación del legislativo. Se trata de dos mecanismos que estaban ausentes en el diseño institucional y constitucional del presidencialismo mexicano y que pueden fomentar su adecuación funcional.

El “Pacto por México” que construyeron las principales fuerzas políticas durante los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto consistió en delimitar una serie de temas para formar una agenda de gobierno común y, también, para acordar los tiempos de discusión y la aprobación de reformas. En cierta medida, el pacto ha representado un esbozo de un gobierno de coalición, aunque centrado únicamente en la construcción de una *coalición parlamentaria*. Aún falta que entren en operación mecanismos como la ratificación y la apertura del gabinete; con ello, el presidencialismo mexicano habrá adquirido matices parlamentarios inéditos.

¹¹ *Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral; 13 de Mayo de 2014.*

La posibilidad de formar *gobiernos de coalición* implica por tanto que habrá un instrumento más para reforzar los mecanismos de control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, una vez que el primero podrá intervenir en la ratificación del gabinete. Al mismo tiempo, se le otorga al mandatario un instrumento para obtener el apoyo del legislativo vía *coaliciones parlamentarias*. Y por último, significa también que el gobierno y la administración pública ya no serán ocupados por funcionarios de un solo partido político.

Fuentes de Consulta

Colomer, Josep y Gabriel Negreto (2003), “Gobernanza con poderes divididos en América Latina” en *Política y Gobierno*, vol. X, núm 1, CIDE, México, pp. 13-61.

Jiménez, Margarita, (2006), *La oposición parlamentaria en México. Su rendimiento en gobiernos de mayoría dividida*, Miguel Ángel Porrúa, México, 365 pp.

Lanzaro, Jorge, (2001), “Tipos de presidencialismo y modos de gobierno en América Latina” en Jorge Lanzaro (comp.), *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, CLACSO, Buenos Aires, pp 15-40.

Lijphart, Arend, (2000), *Modelos de Democracia*, Ariel, Barcelona, 315 pp.

Linz, Juan, (1994), “Democracia presidencial o parlamentaria ¿qué diferencia implica?” en Juan Linz y Arturo Valenzuela (comps.), *Las crisis del presidencialismo, tomo 1, Perspectivas comparadas*, Ariel, Madrid, pp. 25-143.

Nohlen, Dieter, (1998), “Presidencialismo versus parlamentarismo: dos enfoques contrapuestos” en Dieter Nohlen y Mario Fernández (ed.), *El presidencialismo renovado. Instituciones y cambio político en América Latina*, Nueva Sociedad, Venezuela, pp. 15-25.

Nohlen, Dieter, (2012a), *¿Cómo estudiar Ciencia Política? Una introducción de trece lecciones*, Marcial Pons, Madrid, 310 pp.

Nohlen, Dieter, (2012b) “Sistemas electorales y partidos políticos en su contexto” en *Revista Mexicana de Estudios Electorales*, núm. 11, julio 2011-julio de 2012, SOME, México, 221-235 pp.

Sartori, Giovanni, (1996), *Ingeniería constitucional comparada. Una investigación de estructuras, incentivos y resultados*, FCE, México, segunda reimpresión, 227 pp.

Valadés, Diego, (2007), *La parlamentarización de los sistemas presidenciales*, UNAM/IIJ, México, 255 pp.

Valadés, Diego, (2005), *El Gobierno de gabinete*, UNAM/IIJ, México, 170 pp.

Documentos oficiales

Iniciativa de reforma al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, LXII Legislatura, Senado de la República, 24 de Septiembre de 2013.

Proyecto de Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político electoral; 13 de Mayo de 2014.